

## **LA REPÚBLICA DEL 16 DE FEBRERO**

Josep Miralles Climent  
(doctor en Historia)

Cuando se valora la Segunda República española generalmente se suele pensar en la apoteosis de su proclamación y en las mejoras que supuso en los aspectos sociales respecto a la Monarquía de Alfonso XIII y las dictaduras de Primo de Rivera y de Berenguer, así como en el retroceso que supuso el llamado Bienio Negro, durante el gobierno derechista del Partido Radical y de la CEDA, que provocó la Revolución de Octubre de 1934.

Poco se ha estudiado la época desde que el del Frente Popular (FP) alcanzó el poder el 16 de febrero de 1936 hasta el estallido de la guerra civil, que fueron unos meses de una violencia extrema y de una agitación muy por encima de los casi cinco años anteriores, protagonizada fundamentalmente por la Falange y por la extrema izquierda seguidora del Partido Socialista (sector caballerista y ugetista) y, en menor medida, por comunistas y anarquistas, además de los sindicatos afines, UGT y CNT. Pero la extrema violencia no fue solo entre la izquierda y la derecha, sino también con las fuerzas de seguridad, e incluso, pistola en mano, entre social-comunistas por una parte y la CNT por otra, como ocurrió en Málaga en el mes de junio o en Madrid en julio.

Pues bien, recientemente dos catedráticos de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey Reguillo, han publicado una amplia investigación sobre esa época que aclara muchas cosas sobre esos cinco meses.

Como es bien sabido, el FP estaba formado por Izquierda Republicana (IR), Esquerra Republicana de Cataluña, Unión Republicana, PSOE, PCE, POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), y UGT. La CNT no participó, pero tampoco pidió la abstención en las elecciones de febrero de 1936, lo que favoreció el triunfo de la izquierda en dichas elecciones. La presidencia de la República la ocupaba en ese momento el republicano conservador Alcalá Zamora y era presidente del Consejo de ministros el centrista Portela Valladares.

Sin acabar el recuento de votos de las elecciones del 16 de febrero —en las que se sabía que había que celebrar una segunda vuelta en cinco circunscripciones y repetirlas en algunas secciones por causa de haber habido rotura de urnas— miles de votantes del FP ya salían a la calle

celebrando la victoria, lo que suponía una presión para el desarrollo final del recuento. En un acto inaudito, Portela dimitió sin esperar una transición ordenada de poderes, ni a que se celebrara la segunda vuelta, ni tampoco a que se constituyesen las Cortes donde rendir cuentas.

Así fue como, sin saberse si el FP tenía una mayoría clara, el presidente, Alcalá Zamora, encargó a Manuel Azaña, principal cabeza del cartel electoral FP, formar nuevo gobierno. Un gobierno exclusivamente de miembros de IR, porque la extrema izquierda no quiso participar; la apuntalaría parlamentariamente y desde fuera, a la espera de que llegara su momento para hacer la revolución, aunque no en el caso de los prietistas, porque cuando Azaña llegó a la presidencia de la República el 11 de mayo y se formó un nuevo gobierno, los socialistas seguidores de Largo Caballero amenazaron con romper el FP si la ejecutiva del PSOE —dominada por los seguidores de Indalecio Prieto— aceptaba formar parte del Gobierno.

Pues bien, tal como se ha dicho, ante el incierto triunfo del FP, fruto más de la presión en la calle que de las urnas, las manifestaciones de júbilo de sus seguidores se convirtieron en muchos lugares en violencias tumultuarias, asaltos a locales de las derechas y agresiones, así como violencia anticlerical e incendio de templos y colisiones con la fuerza pública. En este sentido está constatado que durante la primera semana del nuevo gobierno del FP se produjeron 79 episodios de violencia política con 141 víctimas, entre las cuales hubo 37 muertos, y, en los primeros 11 días de marzo, de entre las 198 víctimas en 94 episodios de violencia hubo 44 muertos. Pero estos episodios y muertos los podía ocultar o minimizar el gobierno por mor de la censura debida al estado de alarma y guerra, y, además, apelando al paraguas de las provocaciones «fascistas», un calificativo que se aplicaba a todo derechista que no formara parte del FP, fueran falangistas, monárquicos, republicanos o carlistas.

Los motivos de esa violencia extrema fueron varios. Por una parte, la excarcelación, impuesta por la fuerza, de los presos de la revolución de octubre del 34, antes de que el decreto de amnistía —que formaba parte del programa electoral—, se hubiese publicado de forma oficial. En esas aperturas forzosas de cárceles, salieron también muchos presos comunes y, por supuesto, «revolucionarios» con delitos de sangre. Otra de las causas que provocó violencias fue la imposición por la fuerza para readmitir a todos los que habían sido despedidos con motivo de la huelga general revolucionaria a los que, además, se les tenían que pagar los salarios no devengados desde entonces, y ello, aunque supusiera el despido de los que

estaban trabajando en el momento y a quienes se enfrentaron con saña considerándoles esquirolas. Un tercer motivo fue el cambio inmediato y por la fuerza en las corporaciones municipales para que fueran sustituidas por gestoras del FP, incluso de aquellas en las que en las elecciones de 1931 el voto mayoritario había sido de derechas. En demasiados casos el miedo hizo que muchas autoridades locales desaparecieran, igual que lo habían hecho también muchos gobernadores civiles incapaces de controlar las violentas revueltas de la izquierda más radical. El resultado fue la general toma de los ayuntamientos que habían gobernado derechistas o republicanos no afectos al FP. Aunque Azaña se mostraba alarmado por la actitud de hacerse con el poder local con violencia por parte de socialistas y comunistas —un partido todavía muy minoritario—, se vio obligado a reconocer, dando fuerza de ley, esos cambios ilegales con tal de evitar romper la coalición frentepopulista.

Hubo otra importante causa de la violencia que fue la tensión que se produjo en el campo, debido a las pésimas condiciones de vida y falta de trabajo, especialmente en Andalucía, Extremadura y Castilla; un tema urgente pero complicado, que ya se había intentado resolver en 1932 con la ponderada Ley de Reforma Agraria que por motivos presupuestarios y burocráticos avanzó muy lentamente, pero que, además, movilizó en su contra a la derecha liberal y a pequeños y medianos campesinos perjudicados por la política laboral, lo que, unido a las reformas secularizadoras facilitaron el triunfo de las derechas en 1933. Pero cuando el FP se hizo con el poder, los socialistas y los comunistas —siempre desde fuera del gobierno—, entendieron que ahora se tenía que producir un vuelco total, dando lugar a una enérgica política de redistribución de la tierra, aunque eso fuera más allá de lo pactado en el manifiesto electoral del FP. Pero esos planteamientos populistas de la extrema izquierda no suponían una solución porque, tal como concluyó Malefakis (uno de los primeros estudiosos de la reforma agraria durante la República), «desgraciadamente muchos problemas históricos no tienen soluciones simples», ya que las buenas intenciones, sobre todo si van acompañadas de malos diagnósticos técnicos, no producen los resultados esperados en el campo de la política económica. Y las buenas intenciones de la izquierda radical fueron que, a finales de marzo, el sindicato socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), ordenó que se produjeran los asaltos masivos de fincas y, una vez más, el Gobierno se vio obligado a dar fuerza de ley a los asentamientos irregulares obligando, además, a contratar por turno riguroso, pero excluyendo y humillando a trabajadores

de derechas. Todo ello no sólo generó enfrentamientos con una violencia extrema entre obreros de bandos distintos o entre estos y los patronos, sino que supuso un auténtico fracaso que podía arruinar la vida económica de una agricultura que en aquellos años lo era casi todo, ya que no se tradujo en ningún aumento de la productividad ni en una mejora del empleo agrario. Así, a finales de la primavera, en provincias como Badajoz reinaba un completo caos pese a haber recibido tierras una tercera parte de la población rural. Y los episodios de la violencia, sólo en el ámbito rural y durante los cinco meses del FP, fueron 165 casos que provocaron 45 muertos.

Pero es que, además, paralelamente a estos hechos, en las altas esferas del Estado, existía una pugna entre el presidente de la República, Alcalá Zamora y el jefe del Ejecutivo, Azaña, quien consiguió hacer caer a aquél, siendo él mismo quien pasó a ocupar la Presidencia republicana, nombrando nuevo jefe del Gobierno a su amigo y correligionario, Santiago Casares Quiroga, un político que había adquirido fama de duro durante el primer bienio como ministro de Gobernación y a quien se le atribuía una aplicación sectaria de la Ley de Defensa de la República durante aquel periodo.

En este caldo de cultivo, en ese ambiente de enfrentamientos de clase — pero también entre sindicatos y dentro mismo del PSOE—, las derechas posibilistas que intentaban actuar dentro de la legalidad republicana, comenzaron a perder el control de sus bases que se radicalizaban porque consideraban que no podían defenderse dentro de ella, lo cual aumentó más si cabe esa espiral de violencia.

Y aunque el Gobierno intentaba minimizar esa violencia mediante la censura de prensa, el Consejo Nacional de IR publicó un manifiesto en el que se lamentaba diciendo que «España ha sido juzgada en el exterior como un país en permanente guerra civil, incapaz de convivencia y de categoría democrática; la República ha sido vista como un régimen interino e inestable, al que los propios republicanos dificultaban la base de su afianzamiento». También desde las filas socialistas, Prieto —crítico con la bolchevización de una buena parte de su partido y sus juventudes— condenó la violencia, «las revueltas y las algaradas por contraproducentes en orden a los intereses del país y de los trabajadores» y porque se creaba «un ambiente propicio al fascismo», constatando también que España estaba «viviendo una guerra civil a la que había que ponerle término».

Si dejamos aparte la revolución de 1934, estos cinco meses fueron los más violentos de la Segunda República (en total, 977 episodios de violencia; 1659 heridos; y 484 muertos), con unas manifestaciones plagadas de belicismo y *brutalización* de la política, con lenguajes maniqueos henchidos de militarismo y visto todo ello como una contienda permanente que se pretendía resolver con el aniquilamiento del adversario.

Conviene recordar que, a pesar de todo ello, la mayor parte de los militares, en 1936, todavía mantenía una posición política neutra, porque tanto la derechista Unión Militar Española (UME) como la izquierdista Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), eran fuerzas minoritarias dentro del Ejército. El golpe de Estado estuvo preparado por un puñado minúsculo de oficiales que, poco a poco fue ganado adeptos, atrayendo también a militares de convicciones republicanas. Y es que las desordenadas, improvisadas y frustrantes conspiraciones, tanto civiles como militares, fueron más contra el Frente Popular que contra la República.

Pocas semanas antes del golpe de Estado el recrudecimiento de la violencia con estallido de bombas en la capital fue importante en un escenario cada vez más radicalizado de la huelga general de la construcción, con las rivalidades y el pistolerismo entre militantes de la UGT y la CNT con muertos de por medio, igual que seguía ocurriendo entre fascistas e izquierdistas.

Fue en este contexto cuando el 12 de julio se produjo, primero el asesinato del teniente Castillo, instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) a manos pistoleros de la Falange, y, al día siguiente, militantes socialistas y Guardias de Asalto del cuartel de Pontejos, salieron a vengar la muerte de Castillo, deteniendo y asesinando después al líder de la oposición, Calvo Sotelo. Este último hecho fue la chispa que encendió la mecha de la ya casi ultimada conspiración militar —y civil— del 17 de julio de 1936, mediante un golpe de Estado que, al frustrarse por la división del Ejército y la resistencia de amplios sectores de la izquierda, supuso el inicio de la Guerra Civil española.